

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

El once (11) de octubre de dos mil veintidós (2022), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **ALEJANDRO ESTRADA MONTOYA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) y la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** (en adelante PROTECCIÓN S.A.), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-017-2021-00164-01.

### AUTO

De conformidad con el memorial de sustitución de poder allegado vía correo electrónico junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia por parte de la sociedad JAIME SALAZAR S.A.S. quien representa judicialmente los intereses del demandante en este proceso, y el certificado de existencia y representación legal de la sociedad MUÑOZ MEDINA ABOGADO S.A.S. quien representa judicialmente los intereses de Colpensiones en este proceso, se reconoce personería al abogado SERGIO ALBERTO SUAZA QUINTERO, portador de la T.P. 162.317 del C. S. de la Judicatura, para que represente al demandante en este proceso como apoderado sustituto y a la abogada YESENIA CANO URREGO, portadora de la T.P. 271.800 del C. S. de la Judicatura, para que represente a Colpensiones en este proceso como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos.

#### 1. ANTECEDENTES:

El demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la ineficacia de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante

RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

**Como fundamento fáctico de sus pretensiones** relata el actor que inicialmente estuvo afiliado al RPM administrado por el ISS y que posteriormente se trasladó al RAIS a través de la AFP PROTECCIÓN S.A.

Expone que al momento del traslado de régimen, la AFP PROTECCIÓN S.A. le indicó que era conveniente su traslado atendiendo a la situación que estaba atravesando el ISS, ya que este iba a desaparecer, además que con ellos tenía la ventaja de pensionarse antes de la edad y que la pensión era heredable, pero no le explicó que la pensión era por capital, no le indicaron los requisitos para obtener una pensión anticipada, ni le explicaron sobre la garantía de pensión mínima ni cuándo operaba, tampoco cuándo procedía la devolución de aportes. No le hablaron sobre aportes voluntarios ni la finalidad de los mismo, ni del bono pensional, la fecha de redención y que pasaría de darse una negociación anticipada del mismo, ni le hablaron del derecho de retracto, mucho menos sobre el riesgo financiero, ni le advirtieron sobre el tiempo mínimo de permanencia ni el tiempo prudencial para trasladarse al ISS si así lo deseaba. Tampoco le hicieron un comparativo entre la AFP y el ISS, ni le indicaron los factores que influyen para establecer el monto de la pensión como la expectativa de vida propia y de los beneficiarios, no le brindaron una información adecuada, suficiente, clara, comprensible, oportuna y cierta para el traslado, donde se objetivaran las ventajas y desventajas de ambos regímenes existentes, fracturándose el consentimiento informado.

Indica que 3 meses antes de cumplir los 52 años de edad lo llamó un asesor de PROTECCIÓN S.A. indicándole que le convenía continuar con dicha entidad, siendo insistente en que se podía pensionar antes de la edad, que no le convenía trasladarse a COLPENSIONES, puesto que la pensión no era heredable.

Aduce que le solicitó a PROTECCIÓN S.A. le remitiera el estudio previo individual y concreto que se le hizo al momento del traslado para determinar las ventajas y desventajas del mismo o su permanencia en el RAIS, a lo que la entidad respondió que dicha información para la época se suministraba de manera verbal, posteriormente solicitó proyección de la mesada pensional.

## 2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La *a quo* despachó favorablemente las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado del demandante al RAIS, condenando en consecuencia a la AFP PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, los recursos de la cuenta de ahorro individual del actor, incluyendo el capital, sus rendimientos, y los recursos del fondo de garantía de pensión mínima, como si hubiese permanecido en el RPM, ordenando además a COLPENSIONES a recibir éstos dineros y reflejarlos como semanas en la historia laboral de la demandante.

Para fulminar condena, la *a quo* argumentó que la Corte Suprema de Justicia tiene fijada una línea jurisprudencial sobre el tema de la afiliación a un régimen pensional que se sintetiza en la obligación de brindar una información completa, suficiente, idónea y comprensible sobre las características de los regímenes, determinando e informando la conveniencia e inconveniencia de uno y otro régimen y la carga de las AFP de demostrar que efectivamente entregaron la debida información a los afiliados al momento del traslado.

Seguidamente expuso que en el presente proceso no se probó por parte de PROTECCIÓN S.A. que, al momento de la afiliación de la demandante, se haya cumplido con el deber legal de otorgarle una explicación integral sobre la regulación de los regímenes pensionales, las ventajas y desventajas, resultando insuficiente como prueba de la existencia de un consentimiento suficientemente informado la suscripción del formulario de afiliación pre impreso, por lo que consideró que existe mérito para acceder a las pretensiones y declarar la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS a través de la AFP PROTECCIÓN S.A.

Indicó que en criterio de dicho despacho los gastos de administración, incluidas las sumas destinadas a los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes no deben ser devueltos a COLPENSIONES en tanto dichos descuentos se realizan en ambos regímenes pensionales y no financian la pensión de vejez.

Seguidamente declaró no probadas las excepciones propuestas por las demandadas, entre ellas la de prescripción al considerar que, la validez del traslado de régimen se trata de un derecho íntimamente ligado a la pensión, mismo que es un derecho fundamental imprescriptible.

Finalmente condenó en costas a las AFP PROTECCIÓN, y se abstuvo de imponer condena en costas en contra de COLPENSIONES.

### **3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

El apoderado de COLPENSIONES apela la sentencia parcialmente indicando que la consecuencia directa que se genera luego de declararse la ineficacia según la Corte Suprema de Justicia en las Sentencias SL 1688, SL 1421 de 2019, SL 3464 de 2019, SL 4964 de 2018, 4989 de 2018 y que se refrenda a su vez por la sentencia SL 1421 de 2019, la ineficacia del traslado de régimen conlleva la devolución de la totalidad del capital ahorrado junto con los rendimientos financieros incluidos los gastos de administración y comisiones deben ser devueltos con cargos a las propias utilidades del fondo de pensiones privado.

Indica que en el presente caso la juez no ordenó la devolución de dichas sumas mencionadas, por lo que le solicita al Tribunal revocar la sentencia, para que en su lugar se ordene la devolución de los gastos de administración y todo lo que la AFP PROTECCIÓN S.A. ha captado con ocasión a la afiliación realizada al RAIS por el demandante.

### **4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, el apoderado judicial de la parte demandante, al igual que el de COLPENSIONES allegaron escritos de alegatos, en los que señalaron resumidamente lo siguiente:

#### **ALEGATOS DEL DEMANDANTE.**

En forma respetuosa le solicito confirmar la sentencia del señor Juez A-quo, dado que la misma se acompasa con el reiterado precedente del órgano de cierre en estos escenarios, pues no se probó, teniendo la carga de la prueba, por parte de las administradoras de pensiones, que a mi mandante se le hubiere dado una información plausible que dejara incólume el consentimiento informado, ineludible en el tópico de las afiliaciones o traslados de regímenes.

La sentencia de primera instancia consulta el precedente reiterado de órgano de cierre. Sin pretender ser exhaustivo remito a las sentencias radicados: SL1236- de 2014; SL9519- de 2015; SL 17595 de 2017; SL19447de 2017, SL3496 de 2018; SL1421- de 2019

Ese balance jurisprudencial consulta el horizonte que inspira la carta política del 91 como es la vigencia de un orden justo que garantice, entre otros el trabajo, la vida, la

dignidad humana, la libertad, seguridad social y justicia. Pilares de la paz social, que se proyectan en las normas rectoras de la misma ley 100 cuando en el preámbulo y en el **artículo 1º** predica que el **objeto** de la seguridad social integral es garantizar los derechos irrenunciables de las personas para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana; matizando en el **art. 4º**, que la seguridad social es un servicio público de índole esencial en aquellas actividades vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones.

Con todo, no se pierda de vista que el art. **271 de Ley 100/93** de manera categórica dispuso que cualquier persona natural o jurídica que atente en cualquier forma; **óigase bien, en cualquier forma, contra** el derecho del trabajador a su afiliación y selección de régimen, además de la multa que ello conlleva, comporta la aniquilación de la misma, con la facultad expresa de realizarse nuevamente en forma libre y espontánea, dados los efectos **ex tunc** que comporta (desde siempre).

A fortiori el art. **272** ejusdem, no deja margen de interpretación dada su claridad en su mandato, que en su exégesis plausible no es otro que dejar sin efectos jurídicos el corpus iuris que articula el sistema de seguridad social integral, cuando matiza: “**no tendrá en ningún caso, aplicación cuando menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores...**” Precepto que por demás, eleva a categoría de regla, el mandato consagrado en el art. 53 superior in fine: “**La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad y la dignidad humana, ni los derechos de los trabajadores.**” Situación que sugiere, que el pluricitado art. 272 desarrolla este mandato constitucional, y que constituye un dique de contención en pro de los derechos de los trabajadores, cuando los mismos sufran algún detrimento, caso en el cual, el poder jurídico in situ en la norma en comento, no admite talanqueras o cortapisas, pues manda a inaplicar el cuerpo iuris de la seguridad social.

Ahora, en atención a que las entidades demandadas formularon la excepción **de prescripción** de la acción, debe tenerse presente que de acuerdo con las sentencias CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019 y CSJ SL1689-2019, la acción encaminada a la declaratoria de ineficacia del cambio de régimen pensional es imprescriptible.

#### **ALEGATOS DE COLPENSIONES.**

Reitero, la imposibilidad de declarar la nulidad de la afiliación y traslado de aportes del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, ya que no se probó ni declaró un vicio en el consentimiento por parte de la demandante, en el

momento en que decidió cambiar de Régimen Pensional y trasladarse al régimen de ahorro individual.

A demás es improcedente el traslado de régimen en virtud del Artículo 2o Numeral E de la ley 797 de 2003, ya que el demandante presento su petición fuera del término legal establecido y además ratificó su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con el formulario de afiliación donde expresamente determina y acepta vincularse al fondo privado.

Se debe tener en cuenta que, nuestro sistema legal no establece que se pueda imponer a una persona, en este caso a una Entidad, una carga económica por un daño antijurídico o un perjuicio que otro causó y frente al cual no tuvo ninguna posibilidad de evitarlo, por ende, no puede pretenderse que COLPENSIONES, sin haber tenido responsabilidad ni incidencia alguna en el traslado, máxime cuando no podía obligar a la afiliada a permanecer, asuma el pago de una pensión superior a la que puede otorgarse con el dinero existente en la cuenta de ahorro individual, es de indicar, que realmente quien sufriría los efectos de la ineficacia es COLPENSIONES, un tercero que no participó tan siquiera en la etapa precontractual indispensable para la válida formación del consentimiento que ahora se pretende sea sancionado, y quien además, deberá asumir la carga impositiva que deviene de un nuevo afiliado.

Finalmente, es necesario resaltar que no es plausible imponerle a la codemandada obligaciones y soportes de información por escrito que no fueron previstos por el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado, este es, el Decreto 663 de 1993 por cuanto exigirlo deviene en una violación directa a los principios de confianza legítima, legalidad y debido proceso.

En caso de que se confirme la condena dirigida a declarar la ineficacia del traslado, solicito tener en cuenta el precedente de la Sala de Casación Laboral contenido en sentencias SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571- 2021 y SL 3709-2021, solicito que se adicione que las cuotas de administración y los descuentos del seguro previsional, descontadas por la AFP del RAIS durante el periodo de afiliación, **se deben trasladar debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos.**

## 5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER.

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si la afiliación del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz, y de serlo,

en qué términos y condiciones se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por la demandante.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

## 6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de COLPENSIONES, se consultará la sentencia en favor de dicha entidad por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado de la demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que,

además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que, se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)
2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

En el presente asunto, está probado, que la accionante, estando afiliada al régimen pensional de prima media administrado por el ISS, hoy COLPENSIONES, según se desprende de la historia laboral que militan a folios 45 a 50 del expediente (Documento 15 del expediente digital), se afilió a la administradora del RAIS PROTECCIÓN S.A. el 17 de julio de 1998 como se evidencia del formulario de vinculación a dicha AFP que milita a folio 31 del expediente (Documento 15 del expediente digital), con efectividad a partir del 1° de septiembre de dicha anualidad como se advierte del certificado SIAFP de folio 437 del plenario (Documento 07 del expediente digital).

De otra parte, si bien la demandante no es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues no contaba para el 1° de abril de 1994 con 40 o más años de edad o 15 años de servicio, ello no es óbice para que la AFP PROTECCIÓN S.A. en el año 1998 estuviera en la obligación de suministrarle la información clara, completa y oportuna respecto de las ventajas y desventajas de cada



régimen pensional; sobre todo **cómo alcanzaría la pensión de vejez y de qué dependería su monto en el RAIS.**

Sobre el deber de información antes citado, escuchado el interrogatorio de parte que fue absuelto por la demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:36:45 del video de la audiencia de conciliación, trámite y juzgamiento (documento 14 del expediente digital), el actor manifestar que el asesor de PROTECCIÓN S.A. le indicó que el ISS se iba a acabar y se podía quedar sin pensión, y que en el fondo privado tendría mucha ventajas, que se podía pensionar a una menor edad y que podía ser heredable; sin embargo no confiesa el demandante que se le haya ilustrado sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en cada régimen, la oportunidad de trasladarse entre regímenes y entre administradoras y los términos para ello, entre otros aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Ahora, como bien lo manifestó la *a quo*, ha señalado claramente la Jurisprudencia de la SCL de la CSJ que para probar dicha asesoría, no basta la firma del formulario con la inscripción pre impresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se pruebe que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado, lo cual no probó la AFP PROTECCIÓN S.A., siendo su carga como ya lo ha establecido la jurisprudencia especializada, por lo que habrá de confirmarse en esta instancia la decisión de la *a quo* de declarar ineficaz el traslado de régimen pensional realizado por la demandante en el año 1997 cuando se trasladó del RPM administrado por el extinto ISS a la AFP PROTECCIÓN S.A..

De otra parte, en lo referente a las **sumas que deben ser devueltas** a COLPENSIONES por PROTECCIÓN S.A. a COLPENSIONES, encuentra la Sala que, la orden impartida por la *a quo*, no se encuentra del todo acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en dicha materia y por ello, como lo solicita el apoderado de COLPENSIONES en su recurso de alzada, la sentencia de primera instancia debe ser ADICIONADA, en el sentido de declarar que la devolución que debe realizar PROTECCIÓN S.A. a COLPENSIONES deberá incluir los recursos de la cuenta de ahorro individual del actor, incluyendo sus rendimientos o intereses, así como las cuotas o gastos de administración, incluidos los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima,

primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, y de reaseguro de Fogafín, decir el 100% de las cotizaciones de la demandante, sin descuento de ninguna índole, pues, al declararse la ineficacia del acto de traslado, **ningún efecto jurídico puede derivarse de este**, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019.

Ha explicado la Corte Suprema de Justicia que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»* (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”*.

Contrario a lo manifestado por la a quo en sus consideraciones, en este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019 y SL1688-2019, en la que precisó:

*“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.*

*“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.*

*“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba la actora antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuándo le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.”*

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por las demandadas al dar respuesta a la demanda, se tiene que, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019, proferida el 8 de mayo de 2019.

Finalmente en lo concerniente a la solicitud de COLPENSIONES en los alegatos que la devolución de los gastos de administración, así como todo lo descontado por pólizas provisionales se reintegren debidamente indexados, se observa a folio 85 que en la contestación de la demanda por parte de COLPENSIONES, efectuó solicitud en tal sentido, por lo que este asunto hace parte del litigio en este proceso, indexación que es procedente, pues el porcentaje descontado de la cotización como cuota de administración incluido el porcentaje de seguros previsionales, reaseguro de Fogafín y de garantía de pensión mínima no han devengado los intereses del resto del porcentaje de la cotización que sí va al cuenta de ahorro individual del afiliado, por lo que es justo equitativo que sean devueltas indexadas.

Respectó de la forma de devolución del porcentaje de cuota de administración incluido el de seguros previsionales y el porcentaje de garantía de pensión mínima, la SCL de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL1689-2019 indicó lo siguiente:

*“Está probado que la AFP accionada trasladó al ISS, hoy Colpensiones, los aportes que el demandante tenía en su cuenta individual con sus rendimientos (f.º 127), sin embargo, no existe constancia de que hubiese devuelto también los valores correspondientes a gastos de administración, de los cuales, según se expuso en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL9464-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, debe asumir con cargo a sus propios recursos.*

*En tal sentido, se condenará a la AFP accionada a la devolución de estos dineros, debidamente indexados.”*

En razón a lo anterior, se ordenará que los porcentajes de cuota de administración incluido el porcentaje de seguros previsionales, reaseguro de Fogafín y de garantía de pensión mínima, sean reintegrados a COLPENSIONES debidamente indexados.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia apelada y consultada será CONFIRMADA y ADICIONADA en los términos anteriormente expuestos.

Sin costas en esta instancia por haber salido avante el recurso de apelación de Colpensiones.

## 7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia del 01 de septiembre de 2021 proferida por el JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **ALEJANDRO ESTRADA MONTOYA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES**, y la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, ADICIONÁNDOLA en el sentido de declarar que la devolución que deben realizar PROTECCIÓN S.A. a COLPENSIONES deberá incluir, la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional de la actora, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, seguro Fogafín, y garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, de manera indexada.

**SEGUNDO:** SIN COSTAS en esta instancia.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

**Jaime Alberto Aristizabal Gomez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**John Jairo Acosta Perez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3da174e79f00e5be45ce4495c78ccc8a7d761070d224e443c618e64e7d265845**

Documento generado en 11/10/2022 02:17:13 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**